

LA EVITABILIDAD DE LA DEMOCRACIA

GABRIEL CHOUHY*

EN OCTUBRE DE 2024 se cumplió el quinto aniversario del estallido social, la ola de protestas más masivas de la historia de Chile; un aniversario que, sin embargo, no encontró a la ciudadanía chilena debatiendo sobre los déficits sociales y democráticos que motivaron la explosión de descontento y rabia que se apoderó de las calles de las principales ciudades, ni mucho menos sobre cómo solucionar tales déficits. Tampoco lo encontró rememorando la participación sostenida y transversal de la ciudadanía durante el proceso constituyente. Poco queda hoy de la profunda e inclusiva reflexión colectiva sobre los principales asuntos públicos a la que el estallido dio impulso.

Más allá de las siempre seguras paredes de los seminarios y foros académicos, pareciera que la memoria del estallido apunta casi monóticamente al despropósito de la violencia supuestamente irracional de los de abajo, así como a los excesos identitarios de la Asamblea Constituyente concedida desesperadamente por las élites para dar cauce a esa violencia. Resulta ciertamente sugerente que la memoria popular sobre el cuerpo legislativo fisionómicamente más representativo de la diversidad de los pueblos y territorios de Chile desde el origen de la república haya quedado marcada a fuego por sus excesos de inclusión democrática. Se trata, en todo caso, de una memoria que busca repetir en forma de farsa esa tragedia de la memoria histórica de mucho más largo aliento.

* Ph.D. en Sociología por la Universidad de Pittsburgh. Profesor Asociado, Académico-Investigador del Centro de Estudios en Economía y Sociedad, Universidad Central de Chile. Correo electrónico: gabriel.chouhy@ucentral.cl. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6875-8406>

De hecho, algo más de un año antes del quinto aniversario del estallido social recordábamos otro importante aniversario: los cincuenta años del golpe militar que derrocó violentamente al gobierno constitucional de Salvador Allende. Eterno retorno de lo mismo. En vez de conmemorar la inédita experiencia de agenciamiento colectivo y participación popular que precedieron el final trágico de la democracia, la memoria de cada 11 de septiembre tiende a entramparse en un debate bizantino sobre una pregunta imposible: ¿fue inevitable el golpe de Estado?

Lo que sigue es una breve reflexión sobre esta pregunta y sus implicancias para los modos en que hoy se hace memoria histórica sobre el protagonismo popular en la construcción de la democracia.

ALLENDE COMO TRATAMIENTO

La pregunta sobre la inevitabilidad del golpe de estado del 11 de setiembre de 1973 no se formula por mera pasión por el análisis contrafactual. No se trata de un debate escolástico entre especialistas en diseño experimental, al estilo de “¿hubiese habido dictadura si a la democracia no se le hubiese introducido ese (desafortunado) ‘tratamiento’, por ejemplo, el programa marxista de la Unidad Popular?”. Si así fuera, el experto experimentalista no dudaría en delinear un conjunto de procedimientos mínimos para dar adecuada respuesta a esta capciosa pregunta contrafactual. Sostendría que, idealmente, habría que volver una y otra vez en el tiempo para observar esa misma década, sometida exactamente a las mismas condiciones históricas, políticas, y sociales, para ver si se produce el resultado opuesto (Chile sin golpe de Estado) cuando no se administra el “tratamiento” (o sea, Chile sin Allende).

¿Podríamos realmente observar a Chile en exactamente el mismo contexto histórico pero sin el gobierno de la UP para luego verificar esta supuesta ausencia de golpe militar? ¿Hubieran los militares derrocado a Jorge Alessandri si este, en vez de perder por cuarenta mil votos, hubiera en cambio derrotado a Allende en las elecciones presidenciales de 1970, y luego la Democracia Cristiana le hubiere otorgado su apoyo en el Congreso? ¿Hubiera sido, como en el poema de Gonzalo Millán (1979): *11 de Septiembre. / Regresan aviones con refugiados. / Chile es un país democrático. / Las fuerzas armadas respetan la constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. / Renace Neruda.*

Para el grueso de los partidos de la derecha chilena y gran parte de la élite económica que apoyó (y todavía defiende) el golpe de Estado, la respuesta a las distintas variantes de esta imposible pregunta contrafactual es afirmativa. Casi al unísono, se conjetura que la democracia hubiese sobrevivido de no haber triunfado la UP, o de no haber la UP implementado su programa a pesar de su triunfo electoral, o de haberlo implementado, pero sin hacer la vista gorda a las acciones organizadas de grupos violentos. Hubiese alcanzado sencillamente con haber moderado ese impulso (¿impulsividad?) socializante, respetando, como corresponde, los derechos humanos de los patrones de fundo, de los dueños de las fábricas, de los accionistas de la Kennecott Corporation o la International Telephone & Telegraph, y de otros tantos demócratas y emprendedores de buen nacer y mejor pasar... Pero no, ni Allende ni su Unidad Popular hicieron nada de eso que podrían haber hecho para salvar la democracia, y entonces Pinochet y la dictadura como destino manifiesto.

Si la hipótesis contrafactual tiene o no algún asidero no es empíricamente comprobable. No es, siguiendo los postulados de Popper, una hipótesis falsable. Y no lo será al menos hasta el día en que podamos viajar en el tiempo (en un DeLorean retro ochentero equipado con un condensador de flujos alimentado de plutonio y conducido por Marty McFly, o por otros medios). Solo así podríamos retrotraernos a 1970, inhibir la administración del “tratamiento” (el gobierno marxista y sus múltiples excesos), y luego volver al futuro y observar el resultado esperado (la sobrevivencia de la democracia). Como aquello resulta imposible (recordemos: una tragedia histórica solo se repite como farsa), la ciencia social experimental recurre a grupos o casos de control elegidos al azar y de características idénticas en los que sí pueda observarse el contrafactual en ausencia de tratamiento (ver, por ejemplo, Morgan y Winship, 2015).

¿Pero cuáles serían esos grupos o casos de control que deberíamos observar para testear rigurosamente la hipótesis contrafactual que acecha, caprichosamente, cada 11 de septiembre? Un análisis histórico comparado lo más riguroso posible solo podría contentarse con la contrastación sistemática de casos similares pero nunca idénticos. Explorando la región en busca de tales casos, seguramente encontraríamos que golpes militares a gobiernos constitucionales, seguidos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, los hubo y por doquier, pero con una diferencia fundamental: en ningún caso se verifica que ese *outcome* omnipresente en la América Latina de la guerra fría estuviera precedido por la administración del tratamiento, a saber: el ascenso al gobierno de un frente popular de izquierda.

Pensemos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, otra democracia supuestamente ejemplar que solo unos meses antes, el 27 de junio de 1973, correría con la misma suerte. Allí fue un presidente perteneciente a la fracción más derechista del partido de gobierno, e histórico dirigente de la Liga Federal de Acción Ruralista –movimiento ultraconservador y anticomunista de base agraria y terrateniente– quien sacó los tanques a la calle y decretó la clausura del parlamento. La historiografía uruguaya no ha dudado en afirmar que este autogolpe, caracterizado por sus propios autores como “cívico militar”, fue el desenlace largamente anunciado de un extenso período de deterioro institucional marcado por el ascenso sostenido e incremental del autoritarismo. A la agudización de la puja distributiva, de las huelgas de trabajadores, de la movilización estudiantil, y (seamos justos) de las acciones guerrilleras, los gobiernos conservadores responderían con la clausura de diarios y revistas, la ilegalización de organizaciones sociales y políticas, la militarización de los funcionarios públicos, la intervención de las instituciones educativas, la represión de las protestas, la tortura, y la desaparición forzada; en otras palabras: la limitación, vía coerción estatal, del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos.

No es casualidad, entonces, que en los cinco años que precedieron al golpe en Uruguay la utilización gubernamental del recurso constitucional de las medidas prontas de seguridad (figura equivalente al estado de excepción) fuera casi permanente. Tampoco sorprende que, facultadas por un conjunto de leyes impulsadas por la mayoría parlamentaria de los partidos tradicionales, al momento del golpe las fuerzas armadas ya ejercieran legalmente funciones ejecutivas y judiciales que excedían largamente sus prerrogativas constitucionales (véase, por ejemplo, Demasi, 2009; Markarian, 2012).

¿Fue este “camino democrático a la dictadura”, tal como lo caracteriza el historiador Álvaro Rico (2005), tan inexorable como el golpe militar del 11 de setiembre en Chile?, ¿cuán inevitable era que un presidente de ultraderecha, coludido con las fuerzas armadas, ejecutara un autogolpe, si el Frente Amplio uruguayo, conformado en 1971 a imagen y semejanza de la Unidad Popular, no había alcanzado siquiera el 20% de los votos en las elecciones de ese mismo año?, ¿dónde está el Allende uruguayo? Y más en general: ¿cuán verosímil resulta la hipótesis contrafactual de que no hubiera habido Pinochet sin Allende al constatar que hubo dictaduras y terrorismo de Estado a lo largo y ancho del continente, pero solo en Chile hubo un Allende?

ALLENDE COMO METONIMIA

Antes de refutar la hipótesis contrafactual, hagamos un esfuerzo analítico adicional. Quizás el “Allende” de quienes arguyen que sin él no habría Pinochet signifique algo que va más allá de Allende y su gobierno. Quizás la figura de “Allende”, además de un ícono para la izquierda, sea para la derecha una metonimia: un tropo que designa una cosa con el nombre de otra, estableciendo cierta relación de contigüidad entre ambas. ¿Pero qué sería esa “cosa” no enunciada que el nombre de “Allende” vendría a sustituir? Una hipótesis plausible es que el Allende metonimia en realidad connote un tipo de democracia cualitativamente diferente a aquella democracia supuestamente ultrajada por el gobierno del Allende de carne y hueso. ¿No será *esa* democracia la que debía ser evitada a como diera lugar?

Las razones históricas ofrecidas por Carlos Peña (Hopenhayn, 2023) en vísperas del 50 aniversario del golpe dan pistas en este sentido. Entrevistado por *La Tercera*, el renombrado intelectual de la centroizquierda chilena y rector de la Universidad Diego Portales identifica, como causa primigenia del golpe, el agotamiento del “estado de compromiso” entre las principales fuerzas políticas de la derecha, el centro, y la izquierda. Según Peña, hacia 1970 las élites partidarias se mostraban crecientemente incapaces de administrar las agudas contradicciones inherentes a un sistema institucional gradualmente inclusivo, pero con una estructura socioeconómica estanca y persistentemente excluyente.

En otras palabras, el desborde institucional que derivó en el golpe se habría originado, siguiendo a Peña, en la imposibilidad de incorporar demandas de participación política, social, económica, y cultural de amplios sectores populares sin con ello alterar significativamente las bases estructurales de poder y autoridad de las clases dominantes. De hecho, el ambicioso programa de modernización social y económica –con reforma agraria incluida– iniciado por el gobierno de la Democracia Cristiana y patrocinado por Estados Unidos y su Alianza para el Progreso, intentaba precisamente resolver estas contradicciones entre inclusión democrática y capitalismo concentrador, aunque contando con la aquiescencia de los dueños de la tierra y el capital.

Hoy, con el diario del lunes, sabemos que el éxito del reformismo democristiano fue el principio del fin de esa democracia “de salón”, como bien señala Peña: una democracia elitaria, controlada desde arriba; una democracia en la que los subalternos y desheredados podrían ser beneficiarios,

al fin, de las políticas de un gobierno sensible y benevolente, pero nunca sujetos de su propia historia. Democracia como gobierno *del* pueblo y *para* el pueblo, pero nunca *por* el pueblo.

Basta con recordar el vertiginoso ascenso de la nueva canción chilena, narrado con lujo de detalles en el documental “En septiembre canta el gallo”, como ejemplo elocuente de las profundas transformaciones en la cultura de masas que ya estaban ocurriendo con anterioridad a la victoria de la Unidad Popular. Es que el Chile de fines de los sesenta venía de dos décadas de rápida modernización, caracterizada por el crecimiento de las ciudades, la industrialización incipiente, la migración masiva del campo a la ciudad, la expansión de la educación pública, y extensión de la ciudadanía a sectores otrora excluidos del proceso político. En ese contexto, quizás el cambio más notable en el régimen de dominación política, galvanizado por las reformas democristianas, haya consistido en la potenciación de la agencia política de los sectores subalternos.

La irrupción (en un principio controlada) de los de abajo en la arena política es por cierto una hipótesis plausible; es ese *todo* que la *parte* oculta cuando se invoca al Allende metonimia. Y aun así, no se trata de una hipótesis demasiado novedosa. De hecho, la amenaza disruptiva del orden político, acicateada por el creciente protagonismo popular, discurre a lo largo del proceso de polarización política relatado por Arturo Valenzuela (1978) en su libro *El quiebre de la democracia en Chile* (trabajo precisamente referenciado por el mismo Peña cuando analiza retrospectivamente las causas del golpe). La tesis de Valenzuela, muy celebrada en ámbitos académicos, apunta fundamentalmente al surgimiento de un “centro” propiamente ideológico (o sea, no pragmático), que provoca la erosión gradual pero sostenida del consenso entre los partidos políticos. De la lógica de los tres tercios, se pasa a una con dos polos crecientemente enfrentados.

En este racconto del proceso político, la movilización y participación de vastos sectores de la sociedad opera como telón de fondo. Y la evidencia ofrecida por Valenzuela resulta más que elocuente. Entre 1960 y 1970, el porcentaje de chilenos con derecho al voto se incrementa en un 30%, duplicándose el electorado en términos absolutos. Al mismo tiempo, la reforma agraria debilita profundamente el sistema de hacienda, mientras que la legalización de la sindicalización en el medio rural permite la autonomización y agenciamiento de los trabajadores del campo. En muy pocos años, los nuevos sindicatos rurales pasan de organizar 2.118 a 136.984 trabajadores. En la ciudad, la sindicalización de la industria se incrementa un 38%; en los oficios, un 90%. Y a la expansión de la sindicalización le sigue un

importante aumento del número de huelgas, amparadas por un gobierno menos afín a la represión y más inclinado a resolver las disputas en favor de los trabajadores. Paralelo a la movilización y activación política del mundo del trabajo, desde el gobierno democristiano, y luego desde la izquierda, se patrocina la formación de organizaciones de base territorial como juntas de vecinos y centros de madres.

Si bien para Valenzuela ninguno de estos fenómenos estrictamente “sociológicos” explica en última instancia la crisis de régimen, es evidente que la participación e inclusión política de diversos sectores subalternos jugó un papel preponderante. El ascenso vertiginoso de la DC fue acompañado por un pronunciado declive electoral de los partidos de derecha (liberales y conservadores). Con su vocación tecnocrática, y haciendo uso de sus amplias mayorías, la DC promovió el desmantelamiento de un conjunto de mecanismos clientelares profundamente arraigados en el régimen político, socavando el sistema de compromisos históricamente gestionado por los partidos representados en el congreso.

El debilitamiento de los modos particularistas de incorporación de los grupos de interés se transformó en una necesidad de primer orden ante la ampliación y diversificación de las clientelas, y en un contexto de vertiginosa intensificación de la competencia política. De hecho, al final de su mandato, y con apoyo de la derecha, el gobierno de Frei Montalva impulsó con éxito una serie de reformas constitucionales que redujeron las prerrogativas del congreso en áreas críticas para la intermediación de intereses, tales como la asignación presupuestaria, los reajustes salariales, o la entrega de pensiones (Fernandois Vöhringer & García García, 2009).

EVITABLES ALAMEDAS

Queda claro que al momento de asumir Allende, el de carne y hueso, el régimen sociopolítico chileno experimentaba transformaciones profundas en su periplo hacia una democracia inclusiva. La democracia “de salón”, esa democracia añorada, sin embargo, tenía sus días contados. Es indiscutible que la dinámica de hiper movilización desatada durante el gobierno de la Unidad Popular terminó de resquebrajar el ya alicaído “estado de compromiso”. El impulso socializante, y la contrarrevolución, terminaron por desbordar las capacidades mediadoras de la democracia realmente existente.

Y aun así, como recuerda Valenzuela, durante todo el gobierno de Allende los sectores radicalizados de la clase obrera fueron siempre una minoría;

la ruptura de la democracia fue mucho más el resultado de la movilización de las clases medias (o la pequeña burguesía, como se la llamaba en esa época) en contra de “las amenazas percibidas” de poder popular. En Chile, como en tantos otros países de América Latina, la respuesta a las demandas de participación e inclusión en regímenes democráticos tradicionalmente elitarios exigía transformaciones socioeconómicas profundas.

En cierto sentido, los setiembreres de ayer son todavía los octubres de hoy. Abrir la democracia, redefinir sus alcances y mecanismos de mediación entre ciudadanos diferentes en condición, pero igualmente reconocidos como miembros de una misma *polis*, y en pleno ejercicio de sus derechos, acarrea demasiados riesgos. El miedo a que la transformación del orden democrático amenazara las fuentes del privilegio era muy real para las clases privilegiadas. Para algunos, el camino hacia una democracia inclusiva podía ser, en última instancia, una cuestión de elección. Bastaba con recurrir a quienes detentan el monopolio legítimo (o no) de la fuerza. Abrir las grandes alamedas era perfectamente evitable.

REFERENCIAS

- Demasi, C. (2009). *La dictadura cívico militar: Uruguay, 1973-1985*. Ediciones de la Banda Oriental.
- Fernandois Vöhringer, A. y García García, J. F. (2009). Origen del presidencialismo chileno: Reforma constitucional de 1970, ideas matrices e iniciativa legislativa exclusiva. *Revista Chilena de Derecho*, 36(2), 281-311.
- Hopenhayn, D. (9 de septiembre de 2023). Carlos Peña: “La derecha se ha mostrado como es: Aferrada a su trauma de la UP e incapaz de desprenderse de la dictadura.” *La Tercera*. <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/carlos-pena-la-derecha-se-ha-mostrado-como-es-aferrada-a-su-trauma-de-la-up-e-incapaz-de-desprenderse-de-la-dictadura/PAZWTSE6FNEOLEGBGXT37U37XI/>
- Markarian, V. (2012). *El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat*. Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- Millán, G. (1979). *La ciudad*. Ed. Maison Culturelle Québec-Amérique Latine.
- Morgan, S. L., y Winship, C. (2015). *Counterfactuals and Causal Inference*. Cambridge University Press. <https://books.google.cl/books?id=Q6YaBQAAQBAJ>
- Rico, A. (2005). *Cómo nos domina la clase gobernante: Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005)*. Ediciones Trilce.
- Valenzuela, A. (1978). *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*. Johns Hopkins University Press.